



Oficio

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.
Se suscribe en esta capital; Imprenta de D. Francisco Paez, Fuentel del Rey núm. 18.
En las demás provincias, en las principales ciudades, se suscribe.

Precios de suscripción, en Orense, por trimestre, 2 escudos.
Para fuera de esta capital, francó de porte por trimestres adelantados, 3 escudos.
Número suelto, 150 milésimas.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

El Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación en telegramas de 30 y 31 de agosto último me dice lo siguiente:

«En la madrugada de hoy ha sido capturado en los montes de Almatín, provincia de Toledo, el segundo jefe de la partida capitaneada por el cura de Alcabón, llamado el Negrito, por nueve individuos de la Guardia Civil y Fuerza ciudadana. Habiendo opuesto resistencia el referido 'Negrito', fue preciso hacerle fuego, resultando herido al parecer de gravedad. No hay uovidad en toda la Península.»

«Siguen presentándose á indulto sacerdotes que vagan dispersos en las provincias, donde han hecho partidas sin que ocurra otra novedad en toda la Península.»

«No ocurre novedad.»
«Lo que tengo la satisfacción de comunicar á los habitantes de esta provincia: Orense 1.º de setiembre de 1869.—El Gobernador, Alejandro G. Olivares.

El Ilmo. señor Director general de Beneficencia y Sanidad y Establecimientos penales con fecha 27 de enero último me dice lo siguiente:

«Son repetidas las consultas elevadas á este Dirección general de mi cargo por diferentes autoridades, relativas aquellas á si los Alcaldes de las cárceles de partido nombrados con posterioridad al glorioso hecho del alzamiento nacional de Setiembre, necesitan reunir y justificar las condiciones que antes se exigían para el desempeño de aquellos cargos, y las cuales se determinaban en la real orden de 12 de febrero de 1850.»

No sin estraneza este Centro directivo ha visto las mencionadas consultas cada vez mas frecuentes, y contestado á ellas con la brevedad posible para evitar á los interesados los perjuicios que se les irrogaban al demorarles la toma de posesión de sus empleos.

De lamentar es ciertamente que cuando el Gobierno provisional para tellerijos diera expulsos todos sus miembros de acción, y por razones de alta conveniencia lo derogado la derogación de todas absolutamente todas las leyes y órdenes que determinaban antes las condiciones para ingresar y ascender los empleados públicos, cuyo decreto de

en la Gaceta del siguiente dia, haya quien desconozca o se olvide de esta disposición, de este nuevo y solemne del Gobierno sobre un punto tan esencial de la administración pública.

Los Alcaldes de las cárceles, como los empleados todos, sin excepción de ningún género, no necesitan hoy otra condición que la de su nombramiento; siempre que este se haga por la autoridad á quien corresponde en el libre uso de sus facultades.

Lo que se inserta en este periódico oficial para el exacto cumplimiento de cuanto se dispone en esta disposición superior: Orense 1.º de setiembre de 1869.—El Gobernador, Alejandro G. Olivares.

Vigilancia.—Circular.

El Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación en circular de 24 de julio último me dice lo siguiente:

«Por el Ministerio de Hacienda se dijo á este de la Gobernación en 15 de junio último lo siguiente:

Exmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice hoy á la Dirección general de Rentas Estancadas y Loterías lo que sigue:

Ilmo. Sr.: He dado cuenta al Poder Ejecutivo del expediente instruido en esa Dirección general, acerca de la necesidad de reformar algunas de las reglas acordadas por el Gobierno provisional en su orden de 8 de enero último, que trata de la expedición de documentos de vigilancia; y en su vista, conformándose con lo propuesto por V. L., después de oído el parecer del Ministerio de la Gobernación y el de la Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública, se ha servido determinar, que la administración de los expresados documentos, se sujete en lo sucesivo á las disposiciones siguientes:

1.º Todos los documentos de vigilancia, como son: cédulas de vecindad, licencias para uso de armas, de caza, de pesca, de establecimientos públicos, de carriages, de caballerías de alquiler y de corredores de

cuartropea, seguirán remitiéndose por la Fábrica Nacional del Sello á las Administraciones de provincia, previa consignación de la Dirección general del ramo; haciendo cargo de ellos á los Guarda-almacenes respectivos.

2.º Las expresadas Dependencias remitirán á los Alcaldes en virtud de orden de los Gobernadores, las respectivas cédulas de vecindad; y los demás documentos los distribuirán por sí á las Administraciones depositarias, á las tercenas y á los estancos de las capitales que consideren Hallarse en mejores condiciones para efectuar su expedición; entendiéndose que la concesión de las licencias corresponde respectivamente á las Administraciones de provincia y de partido, previa solicitud de los interesados y demás requisitos acostumbrados.

3.º No obstante lo dispuesto en la regla anterior, queda reservada esclusivamente á los Gobernadores la concesión de las licencias de uso de armas y de caza, en concepto de servicio relacionado, íntimamente, con el orden público; debiendo encargarse la expedición de las mismas á uno de los empleados á sus inmediatas órdenes. En Madrid y en alguna otra de las capitales más importantes, podrán los Gobernadores, previa autorización del Centro directivo correspondiente, confiar á alguno de los empleados á que antes se ha hecho referencia, la expedición de las otras clases de licencias, cuando consideren que así conviene al mejor servicio público.

4.º Los Alcaldes, sin distinción alguna de localidad, son los encargados de disponer el reparto á domicilio de las cédulas de vecindad y del cobro de su importe, abonandoseles el 4 por 100 de la total recaudación por los gastos y pérdidas que pueda irrogarles el desempeño de este servicio. En las poblaciones donde por sus especiales circunstancias convenga encomendar el servicio á los empleados de seguridad pública, podrán

los Alcaldes delegar en ellos, de acuerdo con los Gobernadores, cuanto se refiere á la expedición de cédulas de vecindad, en los términos que crean más acertados; pero debiendo ser siempre los mismos Alcaldes los responsables para con la Administración de las cédulas que reciben.

5.º Los tercenistas y estanqueiros á quienes se cometa la expedición de las licencias ó documentos de que se trata, se proveerán de los mismos como lo hacen del papel sellado, y el premio que tienen por la venta de éste, tendrán por la de aquellos.

6.º Los empleados de los Gobiernos civiles á quienes se confie la expedición de las licencias de uso de armas y de caza y la de las demás que podrá encargárseles según lo prescrito en la regla 3., percibirán el 2 por 100 de lo que recauden, pero habrán de prestar previamente una fianza proporcionada á la cuantía valorada de los documentos de que se entreguen. La falta de fianza que no deba ser indesigual, puede suplirse por una orden especial de los Gobernadores, cuya responsabilidad personal sustituirá á aquella, en los casos de alicance ó desfalco por parte de los expendedores.

7.º Las personas domiciliadas fuera de las capitales de provincia y de partido que deseen obtener alguna licencia, la solicitarán del Gobernador ó Administrador respectivo por medio de instancia y por conducto de los Alcaldes, según práctica establecida, á quienes se remitirán despachadas con cargo de su importe; entendiéndose que estas diligencias han de ejecutarse por las autoridades que en ellas interyegan.

8.º Los Alcaldes darán cuentas trimestrales á las Administraciones respectivas, de las cédulas de vecindad que hubiesen recibido, con entrega en las Tesorerías del importe de las expedidas; ajustando dichas cuentas á los modelos que se usan en las Subalternas de Estancadas,

Las cédulas inutilizadas sobrantes, para ser admitidas en descargo, deberán estar respaldadas por los Secretarios de los Ayuntamientos de donde procedan, con el Visto Bueno de los Presidentes de las mismas corporaciones.

9.º Los empleados de los Gobiernos civiles encargados de la expedición de las licencias de que se ha hecho mérito, entregaran en Tesorería el importe de las mismas, según lo vayan haciendo efectivo en los días 8, 15, 25 y último de cada mes, conforme á lo dispuesto por el artículo 12 de la Instrucción de 30 de noviembre de 1854; debiendo también acompañar á cada nuevo pedido de documentos, relaciones autorizadas por los Gobernadores de las existencias, sin perjuicio de justificarlas en las cuentas mensuales con arreglo al artículo 14 de la antedicha Instrucción.

10.º Para formalizar el abono de los premios de expedición, se extenderán por las Administraciones de provincia las correspondientes nóminas por trimestres, firmando cada interesado, por sí ó por persona debidamente autorizada, el recibo de la cantidad que le pertenezca.

11.º Los ejemplares de las cuentas á que se refiere la regla 8.º y los demás impresos que para el cumplimiento de este servicio necesiten los Alcaldes y encargados de la expedición de documentos de vigilancia, deberán facilitarse por la Administración de provincia, si se les reclaman, para que haya la debida uniformidad; á reserva de reintegrarse de su importe en tiempo oportuno, de los premios que devenguen dichos interesados, á no ser que por los mismos se salte agua con anterioridad.

12.º Ningún otro abono se efectuará por el servicio de que se hace mérito, ni se autorizará por esta Dirección cantidad alguna á las Administraciones por la parte que hagan de tomar en el desempeño del mismo.

Las Administraciones de provincia procurarán cerciorarse de la verdad de las cuentas que rindan los Ayuntamientos, disponiendo se giren escrupulosas visitas para enterarse de las cédulas que existan en poder de los Alcaldes y la causa de no haberlas expedido, toda vez que su reparto es obligatorio y obligatorio también á todo ciudadano mayor de quince años proveerse de la que le corresponda; y cuidarán igualmente de que se provean de las licencias respectivas todos los que por la ley estén obligados á garantir por medio de ellas el ejercicio de sus ocupaciones, profesiones ó industrias.

Dé orden de S. A. el Regente del Reino, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo tráslado á V. S. para su conocimiento, y á fin de que en lo sucesivo se atenga a lo dispuesto en la comunicación pormenorizada para la expedición y recaudación de los documentos de vigilancia.

Lo que he dispuesto publicar en el Boletín Oficial á fin de que los señores Alcaldes y demás dependien-

tes de mi autoridad cumplan y hagan cumplir cuanto se previene en la referida circular; quedando autorizado para la expedición de las cédulas de vecindad, licencias de uso de armas y de caza, en esta capital, el Inspector de seguridad pública D. Juan María Vidal. Orense agosto 26 de 1869.—El Gobernador Alejandro González Olivares.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ORENSE.

Circular.

Por una equivocación involuntaria producida por el Ayuntamiento del Barco, se invirtió el orden de los ayuntamientos de aquel partido, resultando por consiguiente alteradas las partidas con que cada uno debe contribuir para los gastos de la cárcel de dicho partido.

En su consecuencia, y para rectificar el repartimiento inserto en el Boletín Oficial de esta provincia número 95 correspondiente al día 10 del actual, se publica el siguiente:

Repartimiento de los 3.733 escudos 500 milésimas que imporían los gastos carcelarios del partido del Barco, entre los ocho ayuntamientos que lo componen:

AYUNTAMIENTOS.	Número de vecinos.	Cuota con que debe contribuir cada ayuntamiento.
Barco.....	1.217	624'500
Bullo.....	1.125	577'280
Carballeda.....	860	441'300
Petín.....	564	289'400
Rua.....	490	251'430
Rubiana.....	801	411'»
Vega.....	1.377	706'570
Villamartin.....	842	432'040
	7.276	3.733'500

Orense 31 de agosto de 1869.—E. G. P., Alejandro González Olivares.—Alejandro Quereizaeta, Secretario interino.

(Gaceta núm. 239.)

MINISTERIO DE HACIENDA.

ORDEN.

Visto el escrito del Contador de Hacienda Pública de Madrid ofreciendo algunas observaciones acerca de si compete á ese centro directivo ó al Ministerio de la Guerra el rehabilitar en el goce del haber de retiro á los militares que cesan en él por pasar á servir en las carreras civiles cuando cesan también en estas; consulta á que habrá dado origen la rehabilitación hecha por V. I. en favor de D. Felipe López de Cerain, Capitán retirado, al cesar en el destino de Comandante del Resguardo de Rentas Estancadas de la provincia de Burgos, que encontrándose en aquella situación le fué conferido.

Vista la real orden de 29 de julio de 1842:

Visto el real decreto de 28 de di-

cembre de 1849, orgánico de la Junta de Clases pasivas:

Considerando que la real orden faculta á esa Dirección para verificar las rehabilitaciones en el caso propuesto á petición directa de los interesados:

Considerando que el párrafo segundo del art. 2.º del mencionado decreto, tan lejos de derogar, como el Contador entiende, la citada real orden, la robustece implícitamente, puesto que coloca a todas las clases procedentes de la carrera militar con haber pasivo en iguales condiciones que á las civiles en cuanto sea relativo al pago de él, refiriéndose la excepción que hace en el primer párrafo á sola la clasificación de derechos.

Y considerando que una rehabilitación por haber cesado un retirado en el destino civil que desempeñaba no es una declaración de derecho, sino una reintegración en el que le estaba declarado, y del cual no puede privársele, sino en virtud de providencia de Juez competente;

S. A. el Regente del Reino se ha servido declarar que compete á esa Dirección General del Tesoro, no al Ministerio de la Guerra, rehabilitar para que vuelva al goce del retiro á todo militar que estando en posesión de él cesa en el disfrute por pasar á las carreras civiles cuando á la vez cesa en estas; sin que obste á la rehabilitación el que el interesado haya de optar, ó no á mejora de haber por el tiempo que desempeñó el destino ó destinos civiles, porque en caso afirmativo, y concedida por Autoridad competente, habría de rebajársele del mayor haber á que optara al acreditárselo, el que hubiese percibido como retirado.

Al propio tiempo se ha servido S. A. declarar y resolver que los Contadores de Hacienda Pública de las provincias estaban obligados, como lo están hoy los funcionarios que les han sucedido en las facultades que les estaban atribuidas, á acusar á esa Dirección del Tesoro, informándolos á la vez para evitar trámites dilatorios, cuantos expedientes se la dirijan por conducto de dichos funcionarios en solicitud de rehabilitación, y á certificar en la forma acostumbrada cuantas copias de documentos se la presenten para acreditar servicios en las carreras civiles del Estado.

Dé orden de S. A. lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1869.—Ardanaz.—Sr. Director general del Tesoro público.

(Gaceta núm. 241.)

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Enterado S. A. el Regente del Reino del expediente instruido con motivo de las dudas ofrecidas al Gobernador y Administrador económico de la provincia de Salamanca sobre á cual de las dos Autoridades corresponde ahora el

nombramiento de estanqueros; y considerando que al separarse por completo las funciones de los Administradores se les confirió vida propia e independiente para que dentro de su esfera puedan ejercer toda la acción administrativa necesaria, encaminada al mejor desarrollo de las Rentas y conveniencia del servicio; considerando además que los estanqueros se hallan comprendidos en la clase de subalternos de Hacienda, y que por su cometido ningún enlace tienen con la parte política, sino que por el contrario dependen en un todo de la Administración que los vigila y fiscaliza, se ha servido resolver, de conformidad con lo propuesto por V. I., que compete exclusivamente á los Administradores económicos el nombrar los estanqueros con sujeción á las reglas establecidas.

Dé orden de S. A. lo comunico á V. I. para los fines consiguientes. Hizo guardia á V. I. muchos años. Madrid 30 de julio de 1869.—Ardanaz.—Sr. Director general de Rentas.

COMANDANCIA MILITAR DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

El Excmo. Sr. Capitán general de este distrito en oficio de 24 del que rige me dice lo siguiente:

«El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra con fecha 6 del actual me dice:

«Excmo. Sr.: El Regente del Reino ha tenido á bien resolver lo siguiente:

1.º La suspensión de embarque de individuos del ejército para las islas de Cuba y Puerto-Rico, dispuesta por orden de 20 de mayo último, se dará por terminada en fin del actual.

2.º Los jefes y oficiales pertenecientes á aquellos ejércitos, cuya permanencia en la Península no esté autorizada por las disposiciones generales de embarque ó las particulares que afecten á su situación, embarcarán para incorporarse á sus respectivos destinos en el vapor-correo que saldrá de Cádiz el 30 del corriente mes.

3.º Por el Director general de Infantería se dispondrá lo conveniente para la reunión en Cádiz de todos los quintos que con sujeción á lo prevenido en los artículos 9.º y 10 de la orden circular de 23 de abril próximo pasado se hayan alistado para servir en Ultramar y asistir ó vagar logrando en los depósitos de bandera.

4.º Dichos quintos serán destinados al ejército de la isla de Puerto-Rico hasta el número de 1.100 hombres, los cuales embarcarán por grata á ser posible en el vapor-correo del expresado día 30 del actual, en el del 15 del próximo mes de setiembre. En el caso de no llegar á esa cifra los alistados, se completará con los reclutas procedentes de la clase de paisanos.

5.º y último. Quedan subsistentes las órdenes expedidas por este Ministerio en 8 de diciembre, 31 de enero y demás disposiciones que rigen sobre admisión de recluta, debiendo por lo tanto ingresar desde luego en los depósitos de bandera más próximos los soldados pertenecientes al ejército activo y reservas que sin embargo de haberse alistado, continúan prestando el servicio en sus respectivos cuerpos, con arreglo á lo

